



Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas
57 Park Avenue New York, NY. 10016 Tel. (212) 679-4760 Fax. (212) 685-8741
www.guatemalaun.org

(verificar al momento de su lectura)

**INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA
ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD: “LA PROMOCIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE
DERECHO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD
INTERNACIONALES”**

(19 de enero, 2012)

Señor Presidente:

Le agradecemos haber convocado este debate abierto. También agradecemos al Secretario General su informe bajo las siglas S/2011/634, así como la presentación que nos ha hecho. La justicia y el estado de derecho constituyen pilares de las Naciones Unidas, siendo la base de la convivencia social, el respeto de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el desarrollo. El tema ha sido objeto de atención tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General, y recibió un renovado impulso al más alto nivel tanto en la Declaración del Milenio de 2000 como en la Declaración Final de la Cumbre del 2005. Pensamos que los avances conceptuales y prácticos registrados tendientes a fortalecer el estado de derecho son considerables, sobre todo a partir del informe parte aguas S/2004/616, al clarificar los conceptos de “justicia”, el “estado de derecho” y la “justicia de transición”, así como la manera en que estos se vinculan entre sí, tanto en los planos nacionales como los internacionales.

Desde nuestra óptica nacional, el fortalecimiento del estado de derecho y de nuestras instituciones democráticas son prioridades que emanan de los Acuerdos de Paz suscritos a finales de 1996, y que son compromisos de Estado. En efecto, hace apenas cinco días que asumí una nueva Administración en mi país. En su discurso en el acto de transmisión del mando, el ahora Presidente Otto Pérez Molina dijo lo siguiente: “nuestro compromiso con el Estado de Derecho en todas sus expresiones nos conducirá a buscar la adhesión al Estatuto de Roma, para pasar a formar parte de la Corte Penal Internacional como una muestra de nuestro deseo de transitar a un futuro donde impere la ley y el respeto por todos los derechos humanos de todos los pueblos y de todas las naciones.” En ese sentido, nuestra posición no sólo se inscribe en un ideario, si no obedece a consideraciones puntuales que condicionan nuestro futuro como una sociedad democrática e inclusiva.

Como se sabe, Guatemala emergió de un prolongado conflicto interno al suscribir sus Acuerdos de Paz. Se heredaron instituciones frágiles, sobre todo en el área de la seguridad y la justicia. Aquellos Acuerdos contenían propuestas muy concretas para enfrentar esas falencias. Por añadidura, de ese conflicto se heredó una cultura de impunidad, que no se ha superado del todo hasta nuestros días. Por el contrario, se podría sostener que el panorama se agravó con la irrupción en el país de carteles vinculados con el crimen transnacional, al infiltrar esas instituciones de por sí débiles con funcionarios dispuestos a tergiversar la ley.

Una respuesta novedosa y originalmente concebida en los Acuerdos de Paz, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una asociación importante entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala (CICIG), iniciada en 2007, y apoyada generosamente por varias fuentes donantes. En sus cuatro años de existencia, la Comisión, a que el Informe del Secretario General alude en su párrafo 30, ha tenido éxitos tangibles en sus ámbitos de atribuciones, que incluyen la persecución penal de casos paradigmáticos, la capacitación técnica y la promoción de legislación para

perfeccionar la capacidad del Estado a enfrentarse a la impunidad. El año pasado el Secretario General acordó renovar el mandato de la Comisión por dos años adicionales, hasta septiembre de 2013. La Asamblea General tomó nota de este dato en su resolución A/RES/65/181.

La CICIG constituye un modelo de fortalecimiento institucional novedoso, efectivo y profundo. Al facultar al Secretario General a designar al Comisionado, se genera una intervención atípica de un ente internacional en temas que normalmente corresponden exclusivamente al dominio interno, pero cabe señalar que esa intervención se generó por petición expresa de nuestro Gobierno, como un intento audaz de superar obstáculos estructurales a perfeccionar el estado de derecho en nuestro país. Gracias a esa iniciativa, nuestras instituciones nacionales han sido profesionalizadas en atención, en parte, a las acciones promovidas por la Comisión.

Señor Presidente:

La experiencia guatemalteca es consecuente con lo afirmado por el Secretario General en el informe de 2004 antes citado, indicando que la principal función de la Organización “no es crear mecanismos internacionales que sustituyan a las estructuras nacionales, sino ayudar a formar capacidad nacional en el ámbito de la justicia”. Eso me lleva a las consideraciones que propone el Secretario General en su último informe (S/2011/634) como pasos siguientes para promover el estado de derecho. Me referiré en particular a lo contenido en la parte A de la Sección IX del aludido Informe.

- Primero, creemos que no se toma suficientemente en cuenta la pertenencia nacional (*national ownership*) que es la clave para cualquier transición exitosa. En materia de asistencia, apoyamos que se examinen maneras de proporcionar mayores capacidades para el estado de derecho, siempre y cuando sea a solicitud del país concerniente y en estrecha coordinación con las autoridades locales, con miras a fomentar las capacidades nacionales. Asimismo, en materia de justicia de transición, ésta no es privativa de un tipo de comunidad en particular, por lo que cualquier medida debe reflejar las necesidades específicas de las comunidades afectadas. El evitar imponer modelos externos no constituye una mera política sino que debe reflejar una de las lecciones aprendidas de la comunidad internacional.
- Segundo, pensamos que la solución pacífica de controversias es el mayor garante del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. En realidad, el Consejo debe desarrollar aún más su capacidad institucional para prevenir el surgimiento de situaciones que amenacen la paz y velar, en particular, por ayudar a las partes en un diferendo a resolverlo conforme a los procedimientos que señala la Carta. Cabe poner mayor empeño en que las controversias de orden jurídico sean sometidas a la Corte Internacional de Justicia.
- Tercero, las situaciones deben examinarse caso por caso. Si bien es cierto que esperamos efectividad y progreso en las mediciones sobre el estado de derecho, también nos preguntamos cómo contribuirán los indicadores a reflejar el estado de derecho en los contextos de conflicto y post conflicto. ¿Cuáles son los criterios objetivos para formularlos y monitorearlos? ¿Cómo encajan estos indicadores con los objetivos y parámetros del rendimiento de una operación para el mantenimiento de la paz, que tiene diversas funciones?
- Cuarto, debemos continuar promoviendo la observancia estricta al derecho internacional y el enjuiciamiento de aquellos responsables por violaciones graves de derechos humanos. El tema de la amnistía continúa siendo un gran desafío y genera notorias sensibilidades. Por un lado no se puede hacer *tabula rasa*, como tampoco se puede simplemente exigir perdón. Debe encontrarse un balance entre el exceso de memoria y de responsabilidad, factores que podrían impedir la reconciliación necesaria para sostener la paz y fortalecer la democracia. En todo caso, reconocemos que esta materia plantea dilemas jurídicos, morales, éticos y prácticos difíciles de resolver.

- Finalmente, este año se celebrará en las Naciones Unidas una reunión de alto nivel sobre el estado de derecho. Pensamos que se trata de una oportunidad única para que los Estados Miembros impulsen el estado de derecho como contribución fundamental para consolidar la paz y la justicia y poner fin a la impunidad. Al examinar la situación que guarda este tema encontramos que aún queda mucho por hacer. Planteamos la conveniencia que los Estados elaboren una declaración de principios rectores del estado de derecho. No cabe duda que si la Carta estuviese siendo elaborada hoy día el estado de derecho figuraría al centro de los principios y propósitos de la Organización.

Muchas Gracias